



Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

Registro Nro. 152/25

///nos Aires, a los 25 días del mes de marzo de dos mil veinticinco, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -presidente-, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques -vocales-, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para resolver el legajo **N° CPE 798/2019/3/CFC1** del registro de esta Sala, caratulado "**REDEXIR S.A. y otros s/ recurso de casación**", de cuyas constancias **RESULTA:**

1°) Que, el 3 de mayo de 2024, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en lo que aquí interesa, resolvió: "**I. CONFIRMAR** lo dispuesto por los puntos dispositivos I y II de la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso, con relación al delito de apropiación indebida de los aportes retenidos con destino al Sistema Único de la Seguridad Social a los empleados de REDEXIR S.A. por los períodos fiscales 08/2013 a 03/2014..." (el destacado corresponde al original).

2°) Que, contra dicha decisión, el fiscal general ante esa cámara, Gabriel Pérez Barberá, interpuso un recurso de casación, cuya denegatoria motivó una presentación directa, a la que esta Sala -por mayoría- hizo lugar (Reg. 1048/24). Ante ello, el recurso fue mantenido en esta instancia.

3°) Que, el recurrente encauzó su impugnación en el primer inciso del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).



En lo sustancial, expuso que los beneficios penales contemplados por el Título IV, Capítulo 1, de la ley 27.541, relativo a la "Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs" no resultan aplicables al caso sometido a análisis.

En efecto, destacó que "...por el régimen de regularización establecido en la citada ley, el legislador ha acordado una posibilidad de amnistía a aquellos contribuyentes que omitieran el pago de los recursos que integran la Contribución Unificada de la Seguridad Social, salvo que la omisión de pago incluya aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales", por lo que "...si el contribuyente no aportó lo correspondiente a [estas últimas], queda afuera del presupuesto fáctico previsto en abstracto por la ley, sin que interese si únicamente omitió esos aportes o, además, otros con destino a cualquiera de los restantes subsistemas de la seguridad social".

En virtud de ello, señaló que, en este caso, "...dado que entre los aportes omitidos por la contribuyente quedaron abarcados los que tenían por destino al sistema de obras sociales, y que estos no fueron cancelados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27.562, no puede considerarse realizada la condición empírica de aplicación de esas disposiciones de la ley 27.541"; y que, en consecuencia, "...los beneficios de la extinción de la acción penal y su consecuente sobreseimiento no pueden reconocerse a Redexir SA, a Alejandro Andrés Olmos y a Raúl Darío Olmos".

Indicó que ello resulta "...tan evidente que, para sostener lo contrario, [la] Cámara debió recurrir al forzado artificio de reconstruir los hechos del caso escindiéndolos





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

en dos sub-hechos, de manera que uno calzara bajo ese tratamiento más favorable, mientras que el otro no" y que tal proceder está vedado a los jueces, que no pueden "escindir" las leyes en las que subsumen los hechos, "...es decir, no pueden seleccionar qué parte de una ley (o de varias) aplican y qué parte no, porque ello implica legislar y, por consiguiente, una flagrante violación al principio constitucional de división de poderes...".

A su vez, destacó que los magistrados, si están ante una plataforma fáctica compleja, "...tampoco pueden escindirla de modo de tornar factible una subsunción que, sin esa manipulación, sería inviable".

Agregó que "...la exclusión de los beneficios penales en casos específicos en los que, como en el presente, hubo conjuntamente apropiación de recursos destinados a las obras sociales y a otros subsistemas de la seguridad social no implica tornar letra muerta a la citada ley. Antes bien, en esos casos especiales los contribuyentes sí se estarían beneficiando, precisamente por el régimen excepcional que allí se otorga. Lo único que quedaría excluido es lo relativo a los beneficios penales que, como en todo caso de amnistía, son excepcionales y sólo pueden reconocerse, vía interpretación restrictiva, en los casos que cumplan estrictamente con las exigencias establecidas en el art. 8 de esa ley, lo que, como ya se dijo, no ocurre en el presente caso".

En virtud de lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto la resolución impugnada e hizo reserva del caso federal.



4°) Que, durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del CPPN, las partes no efectuaron presentaciones.

5°) Que, en la etapa prevista por el art. 468 del CPPN, Lionel Sebastián Sartor, en su carácter de abogado defensor de Redexir S.A., Alejandro Andrés Olmos y Raúl Darío Olmos, presentó breves notas, oportunidad en la que solicitó que se rechace el recurso del MPF y se confirmen los pronunciamientos de las instancias anteriores que resolvieron el sobreseimiento de sus asistidos.

Para fundar su petición, indicó que la postura del acusador público "...importa una interpretación que desarmoniza el régimen penal de los recursos de la seguridad social y, peor aún, se contradice con sus propios actos desarrollados al inicio de estas actuaciones donde surge que la Fiscalía proclamaba que el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social sólo estaba integrado por el concepto de aporte de la seguridad social (301) y no por el de obra social (302)".

Agregó que el delito en cuestión "...sólo está integrado por el aporte previsional -301- como ha quedado expresamente reconocido en los inicios de estas actuaciones y, recientemente, por el Congreso de la Nación al sancionar la Ley 27.743 -Título I- Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social", destacando en ese sentido que "...la AFIP al formular la presente denuncia penal, la Fiscalía al realizar el requerimiento de instrucción y el juez a quo al disponer el llamado a indagatoria reprocharon el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social sólo identificando como comprensivo del tipo penal a los





conceptos de aportes previsionales -301- y dejando fuera a los aportes de obra social -302-".

En efecto, destacó que, si esta CFCP observa los importes reprochados, podrá advertir que corresponden al concepto de aportes previsionales de la seguridad social que quedaron amnistiados por la Ley 27.541, pero no abarcan los de aportes de obra social, "...en un claro reconocimiento que ni la denunciante, ni el Ministerio Público Fiscal ni tampoco el juez a quo entendieron que el tipo penal comprendía el concepto de obra social...", sino que dicho concepto fue incorporado tardíamente por el MPF, en oportunidad de resolverse el incidente de falta de acción, en un intento de mantener la vigencia de la acción penal.

Agregó que, en la práctica, "...por la propia historia jurisprudencial de nuestros antecedentes...", el concepto de obra social colisiona abiertamente con el régimen penal de los recursos de la seguridad social y que no existe ni una sola causa de evasión previsional que comprenda dicho concepto.

Destacó que los sobreseimientos dictados deben "...confirmarse mediante la ratificación del criterio excepcional que encontraron los Tribunales a quo para no lesionar las garantías de los sujetos imputados o bien resolviendo definitivamente la cuestión al sentenciar que el tipo penal reprochado solo está integrado por los aportes previsionales de la seguridad social -301- que quedaron amnistiados por la ley 27.541", como así también que debe darse cumplimiento a la garantía de obtener un pronunciamiento oportuno que concluya las presentes actuaciones en forma definitiva, resaltando el extenso tiempo transcurrido.



6°) Así, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques.

El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:

I. Previo a adentrarme en el análisis de la cuestión traída a estudio, corresponde efectuar una breve reseña de los antecedentes de este legajo.

Tal como surge de las constancias obrantes en el Sistema de Gestión Judicial LEX100, el objeto procesal de las presentes actuaciones "...se encuentra conformado por las presuntas apropiaciones indebidas de los recursos de la seguridad social por parte de la firma **"REDEXIR S.A."** (CUIT N° 30-71086142-7), en su carácter de empleadora, en los períodos fiscales **8/2013 a 3/2014** (por las sumas de \$ 371.998,48; \$ 382.184,30; \$ 377.886,07; \$ 381.7189,94; \$562.057,93; \$ 403.137,40; \$ 362.600,49 y \$ 357.662,33, respectivamente), al no haberlos depositado dentro de los diez días hábiles administrativos de vencidos los plazos para su ingreso. Dichas conductas, fueron encuadradas por la Sra. Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 7 del Fuero (en quien fue delegada la dirección de la investigación, en los términos del art. 196 del C.P.P.N.) en las previsiones del art. 9° de la ley 24.769 (según ley 26.735)".

Por esos hechos, la representante del MPF solicitó -en lo que aquí interesa- que se citara a prestar declaración indagatoria a la empresa Redexir S.A., a Alejandro Andrés Olmos y a Raúl Darío Olmos.





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

Ahora bien, previo a que dichas declaraciones fueran materializadas, la defensa de los nombrados efectuó un planteo de falta de acción por inexistencia de delito, toda vez que "...se encontraban pagos los períodos aquí investigados, a través de distintos planes de facilidades de pago cancelados con anterioridad a la vigencia de la ley 27.541".

Ante ello, previa realización de algunas medidas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 resolvió, en lo aquí pertinente: "I.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL por parte de la empresa 'REDEXIR S.A.' (CUIT N° 30-71086142-7) y de los Sres. Alejandro Andrés OLMOS (DNI 24.996.320) y Raúl Darío OLMOS (DNI 16.801.485), por la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, durante los períodos 08/2013 a 03/2014 (arts. 10 y 16 de la ley 27.541 y modificatorias; y art. 59 inc. 2 del Código Penal de la Nación). II.- SOBRESEER TOTALMENTE en la presente incidencia Nro. 798/2019/1 y respecto de "REDEXIR S.A." (CUIT N° 30-71086142-7) y a los Sres. Alejandro Andrés OLMOS (DNI 24.996.320) y Raúl Darío OLMOS (DNI 16.801.485), por la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, durante los períodos 08/2013 a 03/2014, toda vez que la acción penal se ha extinguido (arts. 334, 335 y 336, inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación)...".

Dicha resolución fue apelada por el MPF y confirmada por la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico el día 3 de mayo de 2024.

Por último, como ya se mencionó, el fiscal general ante esa cámara dedujo recurso de casación, cuya denegatoria motivó una presentación directa, a la que esta Sala -por mayoría- hizo lugar en fecha 5 de septiembre de 2024 (Reg.



1048/24). Ante ello, el recurso fue mantenido en esta instancia.

II. Para decidir del modo en que lo hicieron, los magistrados de la Sala "B" de la cámara de la anterior instancia comenzaron por recordar que "...por el art. 2° de la ley 27.562 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 26/08/2020), se sustituyó el art. 8 de la ley N° 27.541, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 'Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo. Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos, que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación... Invítase a las obras sociales y a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a. las previstas en el presente capítulo...' y que '[p]ara la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley...''.

Asimismo, resaltaron que, "...por el artículo 4° de la ley N° 27.562, se sustituyeron los dos primeros párrafos del art. 10 de la ley 27.541, y se estableció que el acogimiento al régimen de regularización aludido producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso, así como la interrupción de la prescripción de la acción penal, aún cuando no se hubiera efectuado denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme y, a su vez, que la '[...]cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas



obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales...’”.

Destacaron también que “...por el art. 9 de la ley N° 27.562 se sustituyó el párrafo primero del art. 14 de la ley 27.541, por el siguiente: ‘...Los agentes o las agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, cuando exterioricen y paguen, en los términos del presente régimen, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo...’”.

Indicaron que “...el Título II del Régimen Penal Tributario establecido por el art. 279 de la ley 27.430, tiene como objeto proteger los recursos de la seguridad social, y el tipo penal previsto por el art. 7 del citado régimen se relaciona con la apropiación indebida de las sumas retenidas en concepto de aportes correspondientes al Sistema Único de la Seguridad Social”, como así también que “...por el decreto N° 2284/91 se creó el Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.) y, asimismo, a los fines de unificar la recaudación, por el art. 86 de aquella norma se instituyó la Contribución Unificada de la Seguridad Social (C.U.S.S.) -cuya percepción está a cargo de la A.F.I.P.-D.G.I.-, denominación que abarca, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a todos los





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social...".

A su vez, expusieron que "...de conformidad con lo establecido por el art. 87 del decreto N° 2284/91, la Contribución Unificada de la Seguridad Social comprende: '...a) Los aportes y contribuciones... con destino al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones. b) Los aportes y contribuciones... con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. c) Los aportes y contribuciones... con destino a la Administración Nacional de Seguro de Salud. d) Los aportes y contribuciones... con destino a la constitución del Fondo Nacional de Empleo. e) Los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales... f) Las contribuciones... con destino a las Cajas de Subsidio y Asignaciones Familiares.'" y que, por ende, "...el Sistema Único de la Seguridad Social está integrado por los distintos subsistemas mencionados por el art. 87 del decreto N° 2284/91, a fin de dar cobertura a las diferentes contingencias que pueden surgir en materia de seguridad social, entre los cuales se encuentra expresamente el Régimen Nacional de Obras Sociales".

En razón de lo expuesto, destacaron que "...como consecuencia de las previsiones establecidas por las disposiciones normativas citadas [, ese] Tribunal ha establecido en ocasiones reiteradas, que '...la omisión de ingresar las sumas retenidas en concepto de aportes correspondientes a los distintos subsistemas que integran el Sistema Único de la Seguridad Social configuraría, por cada período mensual, un hecho único, sin que corresponda escindir



el mismo en función del destino de los distintos aportes...’”.

No obstante, también se recordó “...que por el art. 8 de la ley N° 27.541 antes referido -tanto en su redacción original como por aquella que luego fue establecida por la ley N° 27.562-, se permite la adhesión al régimen de regularización previsto por aquella normativa por las obligaciones relativas a los recursos del Régimen Nacional de la Seguridad Social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la A.F.I.P.-D.G.I., pero se excluyen a los fines de tal acogimiento, entre otros conceptos, a los aportes y a las contribuciones con destino al Régimen Nacional de las Obras Sociales. Es decir que, a los fines del acceso al régimen de regularización mencionado, por previsión legal expresa se da tratamiento diferente a algunos de los distintos subsistemas que integran el Sistema Único de la Seguridad Social al cual se hizo mención [...], y se impide la posibilidad de acogimiento a aquel régimen en el caso de deudas originadas en aportes y contribuciones con destino a las obras sociales, habiéndose admitido solamente la extinción de las acciones penales vinculadas con obligaciones inherentes a aquel concepto, cuando hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley modificatoria N° 27.562, que fue publicada el 26/08/2020”.

Continuaron exponiendo que “...en el presente caso, no existe contradicción respecto de lo establecido por la resolución recurrida, en cuanto a que REDEXIR S.A. habría cancelado la deuda correspondiente a los aportes retenidos a los empleados con destino a la Seguridad Social por los períodos 08/2013 a 03 /2014 en el marco del plan de





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ re-
curso de casación"

facilidades de pago N° H121157, consolidado el 21/08/2014 y terminado de cancelar el 26/08/2019 (confr. el informe presentado por la A.F.I.P. con fecha 11/08/2020 incorporado al legajo digital). Por su parte, tampoco median cuestionamientos en cuanto a que la contribuyente mencionada no habría cancelado la totalidad de la deuda vinculada con las sumas retenidas a sus dependientes en concepto de aportes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales por los períodos fiscales mencionados".

Sin perjuicio de ello, destacaron que "...los importes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales que fueron retenidos y no ingresados en término por los períodos 08/2013 a 03/2014, no superan, por cada mes, el monto establecido como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley N° 27.430".

En ese orden, consideraron que, no obstante lo establecido con anterioridad, "...**de manera excepcional**, en atención a las características particulares del caso de autos que fueron descriptas [...], en que no hay contradicción en cuanto a que los importes retenidos por los responsables de REDEXIR S.A. con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a los períodos 08/2013 a 03/2014 no superan, por cada período, el monto establecido como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario introducido por la ley 27.430, a los fines únicos de evaluar la procedencia de la extinción de la acción penal por las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social de aquellos períodos mensuales, resulta procedente analizar el suceso único consistente en la omisión de depositar, en el término establecido legalmente, los



aportes correspondientes a los distintos subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social por un mismo período mensual, en función de los distintos conceptos que lo integran. Esto es así pues, tal como se advirtió anteriormente por la presente, **por la ley N° 27.541** (tanto por la redacción original como por la disposición modificatoria a la cual remite la ley 27.653), **se escinde conceptualmente el hecho único consistente en la omisión de ingresar, durante un mismo período mensual, la totalidad de los aportes correspondientes a todos los subsistemas que conforman el Sistema Único de la Seguridad Social,** al admitirse la regularización de las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social, y excluirse de aquella regularización a los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales, y luego admitirse, por las leyes Nos. 27.562 y 27.653, la extinción de la acción penal derivada de obligaciones entre las que se encuentran las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales, que hubieran sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de aquellas leyes modificatorias".

Con relación a ello, señalaron que "...mediante una interpretación del art. 8 de la ley N° 27.541 -sea su redacción original o bien aquella según la ley N° 27.562- contraria a la expresada por el considerando anterior, se vulneraría la regla de hermenéutica con arreglo a la cual la incongruencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos: 304:954, 1733 y 1820; 306:721; 307:518; 314:458; entre otros) pues, de lo contrario, en todos aquellos casos en los cuales se verifiquen obligaciones relativas a los aportes y/o contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, los contribuyentes no





podrían beneficiarse con la suspensión del ejercicio de la acción penal o con la extinción de la acción según el caso, derivados del acogimiento al régimen establecido en este aspecto por la ley N° 27.541 respecto de las obligaciones relativas a ninguno de los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad Social, incluso si se hubieran cancelado los montos correspondientes a deudas con el sistema de obras sociales, por cuanto la forma y momento de cancelación con entidad para declarar la extinción de la acción penal previstos para aquéllos, son diferentes que los establecidos para los restantes subsistemas".

En consecuencia, destacaron que "...por la interpretación armoniosa y no contradictoria de las disposiciones legales citadas, de modo de dejar a la totalidad de los términos de aquellas normas con validez y sentido, de forma en que no entren en pugna entre sí (Fallos 301:1149; 307:518 y 4:458, entre otros), **de manera excepcional**, en atención a las características particulares del caso, y **a los fines únicos de evaluar la procedencia de la adhesión al régimen de regularización previsto por la ley 27.541** (según ley 27.562) por las obligaciones relativas a los recursos de la seguridad social de los períodos fiscales 08/2013 a 03/2014, en el que los importes retenidos destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales no superan, por cada período, el monto establecido como condición objetiva de punibilidad por el art. 7 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430, **corresponde escindir conceptualmente y examinar en forma separada los rubros correspondientes a los distintos subsistemas que forman parte del Sistema Único de la Seguridad Social...**".



En función de los motivos reseñados precedentemente, concluyeron que "...al haber mediado la cancelación por parte de REDEXIR S.A. de la deuda correspondiente a los aportes retenidos con destino a la seguridad social de los períodos 08/2013 a 08/2014 bajo los términos de la ley 27.541 (texto según la ley 27.652) y toda vez que los importes de las obligaciones impagas por el régimen de obras sociales de los períodos mencionados no superan, por cada período, la condición objetiva de punibilidad prevista por el art. 7 del Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la ley 27.430, corresponde concluir que una interpretación armoniosa de las disposiciones de las leyes 27.541 y 27.562, así como también del principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, impone estimar extinguida la acción penal con relación a los hechos únicos de apropiación indebida de los aportes retenidos a los empleados en relación de dependencia de REDEXIR S.A. con destino al Sistema Único de la Seguridad Social (comprensivo de los aportes destinados a la Seguridad Social y de los aportes destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales), por los períodos fiscales 08/2013 a 03/2014".

Por último, destacaron que "...en las condiciones mencionadas, [...] el dictado de un auto de sobreseimiento respecto de Alejandro Andrés OLMOS, de Raúl Darío OLMOS y de REDEXIR S.A. con relación a los hechos supuestos de apropiación indebida de los aportes retenidos con destino al Sistema Único de la Seguridad Social a los empleados de aquella sociedad por los períodos fiscales 08/2013 a 03/2014 también se ajusta a una interpretación armoniosa de las normas y de los principios citados precedentemente".





III. Reseñados los antecedentes relevantes del legajo, y circunscripto el análisis a los agravios planteados en el recurso de casación presentado, habré de adelantar que coincido con lo expuesto por la parte recurrente.

Ello, toda vez que la omisión de depositar dentro del plazo legal las sumas retenidas -en concepto de aportes a los distintos subsistemas que integran el SUSS- configuraría, por cada uno de los períodos investigados, un hecho único, de modo que no corresponde escindir tal suceso en función del destino de los diversos aportes. Los artículos 9 de la Ley 24769, según la Ley 26735 -vigente al momento de los hechos- y 7 del Régimen Penal Tributario (RPT) establecido en el artículo 279 de la Ley 27430 -vigente en la actualidad- reprimen tal conducta. De dicha premisa parten tanto la cámara a quo como el recurrente.

Ahora bien, de conformidad con el criterio que ya he expuesto en anteriores oportunidades (CPE 813/2019/4/CFC1, "Novamar S.A. y otros s/ recurso de casación", Reg. N° 1092/2023, rta. el 2/11/23 y CPE 1386/2019/5/CFC1, "Agropecuaria Las Garzas S.A y otro s/ recurso de casación", Reg. N° 1030/24, rta. el 5/9/24, ambas de la Sala III; y CPE 1051/2018/6/CFC1, "Núcleo Salud S.A. y otros s/ recurso de casación", reg. 1070/24, rta. el 12/9/24, de esta Sala I), de la lectura de los artículos citados por la cámara a quo no se desprende que el régimen de la Ley 27541 -modificado por la Ley 27562- haya escindido conceptualmente ese hecho único. Es cierto que el régimen instaurado por estas normas permitía regularizar obligaciones relativas, entre otros conceptos, a los recursos de la seguridad social y excluía expresamente la posibilidad de regularizar, también entre otros conceptos, deudas por aportes y contribuciones con destino a las obras



sociales -alcanzadas por las previsiones del régimen únicamente en el supuesto de que hubieran sido ya canceladas-. Sin embargo, de ello no se deriva que -por previsión legal expresa- se haya escindido el hecho único en cuestión.

Cabe recordar que el régimen bajo análisis constituye ante todo un régimen de regularización de deudas y es desde esta perspectiva que debe ser analizado. El hecho de que dichas normas hayan previsto -además de beneficios de carácter administrativo (como la exención y/o condonación de multas e intereses)- ciertos beneficios de carácter penal (puntualmente, la suspensión y, cancelada la deuda, la extinción de la acción penal) no modifica lo expuesto.

Por ello, no se advierte que considerar tal conducta como un hecho único, a la hora de analizar la procedencia o no de los beneficios de carácter penal, vulnere la regla hermenéutica con arreglo a la cual la incongruencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador. En todos aquellos casos en los que no se hubieran depositado, dentro del plazo legal, los aportes retenidos con destino a las obras sociales, los agentes podían acogerse al régimen por las obligaciones relativas a los restantes subsistemas del SUSS que sí se encontraban abarcados. Asimismo, el acogimiento al régimen en cuestión por dichas obligaciones -en tanto cumpla con todos los requisitos y sea aceptado por la AFIP- resultaría procedente y seguiría produciendo ciertos beneficios para tales sujetos.

A su vez, si bien las normas bajo análisis excluyeron la posibilidad de regularizar, entre otros conceptos, deudas por aportes y contribuciones con destino a las obras sociales, luego incluyeron expresamente a dichas obligaciones al prever la extinción de la acción penal en el supuesto de que éstas





hubieran sido ya canceladas. De modo que, con la interpretación contraria es que se corre el riesgo de vulnerar la regla de hermenéutica antes mencionada, toda vez que podría llevar a concluir que, según si tales conceptos fueron o no ingresados y en qué momento tales obligaciones fueron o no canceladas -que, por cierto, siempre sería con posterioridad a la consumación de los hechos investigados-, éstos configurarían o no un hecho único, lo cual resultaría inadmisibile.

Por lo tanto, conforme a una interpretación armoniosa y no contradictoria de las disposiciones legales en juego, no corresponde apartarse de la premisa consistente en que la omisión de depositar, dentro del plazo legal, los importes retenidos en concepto de aportes a los distintos subsistemas que conforman el SUSS, por cada uno de los períodos investigados, configura un hecho único. De ahí que examinar ese suceso único -aunque sea de manera excepcional, en atención a las características del caso y sólo a los fines de evaluar la procedencia de la suspensión o extinción de la acción penal en los términos de las normas aquí analizadas- en función de los distintos conceptos que lo integran y del destino de dichos aportes resulta arbitrario. Ello, independientemente de que lo adeudado en concepto de aportes con destino a las obras sociales supere o no, por sí solo, el monto establecido por el artículo 9 de la ley 24.769, según la ley 26.735 -vigente al momento de los hechos- y/o por el artículo 7 del RPT, establecido por el artículo 279 de la ley 27.430 -vigente en la actualidad-.

IV. Sentado ello, no puede dejar de mencionarse que, en el caso aquí a estudio, la defensa planteó al presentar las breves notas que advierte una contradicción, toda vez que se



habría reprochado a los imputados el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, únicamente en lo que refiere a los aportes previsionales, destacando que el MPF recién habría incluido aquellos relativos a las obras sociales al momento de expedirse con relación a la extinción de la acción.

Ahora bien, a mi criterio, el planteo de la defensa no puede tener acogida favorable, especialmente si se tiene en cuenta la etapa del proceso en la que se encuentra el sumario y el carácter definitivo que tiene el dictado de un sobreseimiento.

En efecto, al momento en que se dictaron las decisiones aquí analizadas, las actuaciones se encontraban en plena etapa de instrucción, la cual tiene como uno de sus objetivos, justamente, el de definir las circunstancias y características de los sucesos investigados.

En ese orden, no debe perderse de vista que cada hecho comprende diferentes cuestiones, y que, incluso si aquellas no fueran definidas o mencionadas en una primera oportunidad, lo cierto es que -durante esta etapa- las mismas pueden ser determinadas posteriormente, sin que ello implique contradicción o violación alguna por parte de la fiscalía o del órgano jurisdiccional.

V. Sentado lo expuesto, teniendo en cuenta el delito que se atribuye a los imputados y toda vez que, como se dijo, el SUSS se encuentra integrado por distintos subsistemas -que incluye el de las obras sociales-, cabe concluir que, aun cuando lo adeudado en concepto de aportes con destino a la seguridad social por los períodos en cuestión haya sido regularizado en el marco del régimen referido, no es posible considerar que dicho acogimiento derive en la suspensión o





extinción de las acciones penales seguidas a los imputados por tales sucesos. Ello, toda vez que, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 27.541 -modificada por la ley 27.562-, las deudas por aportes con destino a las obras sociales se encuentran expresamente excluidas del régimen. Además, en el caso no se encuentra discutido que aún permanecerían impagas.

El hecho de que luego estas hayan sido incluidas, al preverse la extinción de la acción penal en el caso de que las obligaciones hubieran sido ya canceladas, expresamente y para ese supuesto, refuerza aún más que la intención del legislador en principio fue excluirlas.

Cabe destacar que no escapa al suscripto que el principio impone privilegiar *pro homine* la interpretación legal que más derechos acuerde a las personas frente al poder estatal. Sin embargo, para que tal principio entre en juego debe existir más de una interpretación legal posible y en el presente caso la norma es clara en cuanto a que se encuentran excluidas del régimen las deudas por aportes con destino a las obras sociales.

Lo expuesto no implica que la situación aquí planteada resulte totalmente irrelevante o que no pueda llegar a tener algún tipo de injerencia en el proceso -por ejemplo, en la etapa de juicio oral, en la que eventualmente la regularización o cancelación de las deudas por los aportes retenidos con destino a la seguridad social podrá ser ponderada al realizar el juicio de reproche y graduar la pena que corresponda aplicar a cada uno de los imputados, en el hipotético caso de resultar condenados por los hechos investigados-.

VI. La postura aquí adoptada resulta respetuosa de la doctrina sentada por la CSJN sobre la interpretación de las



leyes, según la cual la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley. Los jueces no pueden sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos 299:167; 300:700 y 302 :973; entre otros).

De modo que las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico. Máxime, cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común, la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y los principios y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, éstas deben interpretarse evitando darle a esas palabras un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:297; 295 :376 y 312:1614; entre otros). Por lo tanto, la exégesis de la ley requiere de la máxima prudencia. Ello es así, a fin de cuidar que la inteligencia que se le asigne no conduzca a la pérdida de un derecho, o bien, el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que inspiró su sanción (Fallos 303:578; entre otros).

Por otro lado, también resulta acorde a lo inveteradamente sostenido por el máximo Tribunal, en cuanto a que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, salvo en aquellos casos que trasciendan ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos 318:1256).





En ese orden, no es posible soslayar que la CSJN sostuvo, con relación a un régimen similar al aquí analizado, que "...al tratarse de un régimen excepcional... la regla hermenéutica que impera en orden a la asignación de sus alcances exige considerar con estrictez y apego la letra de sus preceptos, de modo que no debe extenderse a supuestos no contemplados específicamente por la norma" (Fallos 345:849, considerando 16 -mutatis mutandis-).

Con relación a ello, y respecto de lo manifestado por la defensa -en punto a que la sanción de la ley 27.743 habría confirmado que la intención del legislador de tutelar los recursos de la seguridad social sólo abarcaría los aportes previsionales-, he de señalar que la parte omite explicar cómo las disposiciones de una norma de esa naturaleza (es decir, una ley que prevé un régimen temporal -que, justamente, responde a una coyuntura económica determinada, con una finalidad específica-) podrían servir como pautas interpretativas para analizar otra norma de similares características, dictada bajo diferentes circunstancias, como así también para analizar los elementos de una figura penal que ha sido tipificada en el régimen penal tributario.

VII. En estas condiciones, cabe concluir que asiste razón al recurrente (MPF) en cuanto a que, en las particulares circunstancias del caso, no corresponde declarar extinguidas las acciones penales seguidas a los imputados por los hechos examinados, en los términos del régimen previsto por la ley 27.541 -modificado por la ley 27.562-, ni el sobreseimiento dictado respecto de los nombrados.

Por lo tanto, la resolución recurrida, por la que la cámara confirmó la decisión antes mencionada, resulta arbitraria. Ello, toda vez que no constituye una derivación



razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso, teniendo en cuenta el análisis que corresponde hacer de los hechos investigados a la luz de lo prescripto por el tipo penal *prima facie* aplicable y lo dispuesto por la propia normativa en cuestión.

En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el MPF, anular la resolución impugnada y devolver las actuaciones al tribunal a quo, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a los lineamientos expuestos en la presente; sin costas (arts. 471, 530 y ccdtes. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:

Que habiendo tomado conocimiento en la deliberación del criterio concordante de los colegas y encontrándose sellada la suerte del recurso de casación traído a esta instancia, sólo habremos de dejar asentada, de manera respetuosa, nuestra opinión disidente (cfr. en lo pertinente y aplicable nuestro voto en la causa CPE 1051/2018/6/CFC1, "Núcleo Salud SA y otros s/ recurso de casación", reg. N° 1070/24, rta. el 12/9/24, de esta Sala I) .

Es nuestro voto.

El señor Juez Carlos A. Mahiques dijo:

Adhiero, en lo sustancial, por sus fundamentos y conclusión, al voto del doctor Petrone al que me remito en razón de brevedad, en línea coincidente con lo que consigné en el precedente CPE 1051/2018/6/CFC1, "Núcleo Salud SA y otros s/ recurso de casación", reg. N° 1070/24, rta. el 12/9/24, de esta Sala I.

Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:**





Cámara Federal de Casación Penal

CFCP - SALA I
CPE 798/2019/3/CFC1
"REDEXIR S.A. y otros s/ recurso de casación"

I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, **ANULAR** la resolución impugnada y **DEVOLVER** las actuaciones al tribunal *a quo*, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos expuestos en la presente; sin costas (arts. 471, 530 y ccdtes. del CPPN).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

